

## Venezuela: el incierto camino a la dictadura

Rafael Pocaterra\*

*La madrugada del 4 de febrero de 1992, los venezolanos nos despertamos con la noticia de que un regimiento de paracaidistas intentaba asaltar el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, mientras una brigada de artillería había tomado control de Maracaibo, la segunda ciudad del país. A media mañana, ya neutralizado el golpe, las cámaras de televisión nos presentaban al líder de la intentona, el teniente coronel Chávez Frías. En un primer alarde de la capacidad comunicacional que haría el corazón de su carrera política, el militar llamó a sus compañeros a aceptar que la operación había fracasado «por ahora».*

*En los días siguientes, mucha gente repetía en las calles la consigna, «por ahora», que sellaba la suerte de un sistema incapaz ya de reformarse y recuperar la legitimidad de que había gozado en décadas anteriores.*

\* Por razones obvias el autor firma con pseudónimo.

### La historia de un final

La sospecha de la irreformabilidad del sistema fue confirmada en los años siguientes. Asumiendo el reclamo popular que se expresó en los militares golpistas, Rafael Caldera, respetado expresidente y líder demócrata-cristiano, llegó a la presidencia en 1993 con una base partidista marginal. En su primer enfrentamiento con un Congreso en el que se encontraba en amplia minoría, la población le pidió que diera un golpe desde el poder para barrer a la antigua clase política. Siendo un genuino demócrata, Caldera se negó a hacerlo y prefirió negociar. Las elites políticas y económicas no entendieron que Caldera estaba comprando para ellos

cinco años de margen en los que reformar a fondo el sistema. Aunque el presidente impulsó reformas sustanciales en las áreas bancaria, petrolera, educativa, de seguridad pública y de seguridad social, los partidos, sindicatos y empresarios no le acompañaron. La mayor parte de las reformas llegaron demasiado tarde para

---

*el único objetivo político que indiscutiblemente puede atribuirse a Chávez es el de copar todas las instituciones del Estado*

---

dar frutos visibles. Otras reformas institucionales decisivas ni siquiera se intentaron.

Rafael Caldera renunció a presentar un candidato propio a las elecciones de 1998. Y, reconociendo el derecho del pueblo a depositar la representación política en quien deseara, sobreseyó la causa a los militares golpistas, permitió a Hugo Chávez concurrir a las elecciones y bloqueó cualquier intento de desconocer el resultado. Siete años después del golpe de 1992, Chávez ocupaba el palacio de Miraflores, esta vez legítimamente. Los grandes partidos habían sido incapaces de presentar

un candidato y una plataforma electoral convincentes frente a lo que era, a todas luces, una peligrosa aventura. Como suele ocurrir, el régimen se derrumbó solo, cuando ya ni sus valedores podían creer en él.

### **La administración de una base política**

Las bases de apoyo político del presidente Chávez al momento de llegar al poder se componían de tres elementos fundamentales: uno militar, formado por oficiales de rango medio que habían desarrollado una ideología de la Fuerza Armada como sujeto de poder; otro de izquierda democrática y de izquierda radical, formado por partidos de cuadros con capacidad electoral pequeña o mediana; y finalmente otro, el llamado «chavismo popular y democrático», compuesto por masas de cultura política populista desilusionadas de los viejos partidos, en los que habían participado con las mismas expectativas que ahora depositaban en Chávez. El caudal electoral del presidente dependía prácticamente por entero de este último elemento que, sin embargo, no estaba organizado de manera que pudiera incorporarse a la gestión pública.

El discurso político de Chávez, desde la campaña electoral misma, se concentró en la idea de una «revolución» de contornos imprecisos. Lo único en que los tres elementos de su base política coincidían era en la idea de un recambio de las elites políticas, sindicales y, posiblemente, también empresariales. Más definiciones hubieran fragmentado esa base política heterogénea, unida sólo por la persona misma del presidente. El desafío de Chávez consistía, y consiste, en cohesionar y ampliar su base de apoyo político para asegurarse la permanencia en el poder por un tiempo suficiente para hacer el recambio completo de élites y dominar el panorama político en adelante.

El primer paso de la «revolución» chavista consistió así en el desplazamiento sistemático de los antiguos agentes de poder. Para ello reformó la Constitución y luego la ha venido reinterpretando, incluso podría sostenerse que violando, de acuerdo a las conveniencias tácticas de cada momento. Con base en los hechos, el único objetivo político que indiscutiblemente puede atribuirse a Chávez es el de copar todas las instituciones del Estado para ponerlas a sus órdenes. Así lo atestiguan las numerosas reformas del reglamento de la Asamblea Na-

cional (poder legislativo), la ampliación de la Corte Suprema con una docena de magistrados adicionales de probada lealtad, el reemplazo de centenares de jueces en todos los niveles, la domesticación primero y ocupación después del poder electoral, los ascensos y pases a retiro de militares en función de su alineación política, el nombramiento de incondicionales en la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, organismos encargados precisamente de controlar al gobierno...

Tradicionalmente, en Venezuela la Constitución misma y las designaciones en todos esos niveles eran el resultado de un acuerdo entre los partidos del sistema, en que la oposición obtenía considerable capacidad institucional de control del gobierno.

La conformación del poder ejecutivo cobró también formas inusuales en Venezuela. La Fuerza Armada entró primero como agente fundamental de las políticas sociales, vendiendo comestibles, pintando escuelas y ofreciendo servicios sanitarios. Pronto, las agencias del Estado se poblaron de cientos de oficiales activos y retirados que dirigían departamentos ministeriales, organismos autónomos y empresas públicas, en una militarización

del gobierno que no se veía desde la dictadura del general Pérez Jiménez (1952-58). La extrema izquierda entró también en el gobierno en proporciones muy por arriba de su fuerza electoral. El partido *Patria Para Todos*, sin ningún diputado en la Asamblea, ocupa sin embargo cinco ministerios clave (Educación, Sanidad, Exteriores, Trabajo y Minas).

Este proceso no se hizo sin algún costo dentro de su misma base política. El grueso de la izquierda democrática, que lo apoyó inicialmente, le fue abandonando para situarse en la oposición conforme notó la vocación decididamente caudillista del régimen. Sin embargo, esta pérdida no tuvo un impacto político mayor, puesto que el gobierno consiguió mantener a duras penas la mayoría en la Asamblea y, con nuevas reinterpretaciones constitucionales y cambios en el reglamento de debates, seguir aprobando leyes del máximo nivel. Por otra parte, el aporte en votos de la izquierda democrática era relativamente pequeño y Chávez confiaba con razón en su capacidad de comunicarse directamente con el pueblo a través de la radio y la televisión.

Satisfechas las aspiraciones de poder —y de acceso a los correspondientes recursos y prebendas—

de los militares leales y de la izquierda radical, la cuestión principal de consolidación de la base política del presidente se encontraba en el encuadramiento político del «chavismo popular y democrático». Pero éste es un problema más complejo, que requiere entender otras cosas sobre Venezuela.

### Populismo y petróleo

Hemos señalado que el caudal electoral que llevó a Chávez a la presidencia estaba formado muy principalmente por millones de personas que habían participado en el sistema de partidos anterior, y se habían sentido defraudadas por él. La clave de esa desilusión debe buscarse en la naturaleza de las expectativas que el venezolano de a pie pone en el sistema político, y que el político profesional debe asumir, incluso cultivar, si quiere tener éxito.

El átomo, por así decirlo, de la política venezolana consiste en una relación clientelar entre el político y su base electoral. El político promete que ayudará desde el poder a quienes le ayuden a llegar al poder. Esto debe entenderse como un pacto personal llamado a realizarse a través de conexiones provistas por el aparato político del

líder, no como un contrato político de realización institucional según la tradición liberal. No es raro pues que la figura dominante de la política venezolana sea desde hace siglos el «caudillo» en quien personalmente se pone la confianza, no la institución estable o la ideología política. Mientras la lealtad popular a las instituciones o a las ideologías es muy débil en Venezuela, la lealtad a las personas forma el nervio de nuestra cultura política. Un logro del régimen anterior en materia de cultura política fue sustituir al caudillo por el partido como objeto de la relación clientelar, pero, como se ve, fue un logro precario que no ha costado mucho revertir.

Esta manera de hacer política, que suele llamarse populismo, no es rara en Latinoamérica. Perón constituyó un ejemplo acabado de ella. El líder populista típico, una vez en el poder, debe negociar entre los sectores sociales de los que dependa su permanencia en él, buscando acuerdos para satisfacer las diferentes aspiraciones con las que se ha comprometido. Esos acuerdos suponen alguna forma de distribución de recursos y posibilidades, a menudo por fuera de la institucionalidad o modificándola, que el líder garantiza personalmente. Si suficientes sectores sociales pierden la con-

fianza en la capacidad del presidente para satisfacer los compromisos que adquirió personalmente con ellos, el presidente cae, como ocurre con frecuencia en América Latina.

La versión venezolana del populismo, sin embargo, contiene un ingrediente que no se da en otros

---

*Chávez confiaba con razón  
en su capacidad de  
comunicarse directamente  
con el pueblo a través de la  
radio y la televisión*

---

países. El petróleo, propiedad del Estado, provee al presidente de una fuente de recursos que es a la vez abundante, volátil, y de distribución discrecional. Ello permite dar a unos sectores sin necesariamente quitar a otros, y hace fácil llegar a acuerdos populistas que sólo contienen un elemento distributivo de renta petrolera, no un elemento redistributivo, como ocurre en otros países de América Latina. No es preciso pues desarrollar la capacidad de negociación social que el populismo típico requiere. Y, en efecto, esa capacidad está subdesarrollada en Venezuela después de muchas décadas de rentismo petrolero.

La concepción popular venezolana de la política se resume entonces en la idea de que vivimos en un país rico (con petróleo, hierro, aluminio, oro, energía hidroeléctrica, grandes bellezas naturales...) donde la función principal del presidente es distribuir la riqueza cumpliendo así los compromisos personalmente asumidos en el pacto populista. Como las elecciones se ganan incrementando y encarnando las expectativas de la población respecto a la distribución petrolera, resulta inevitable que antes o después el total de las expectativas sobrepase los recursos disponibles. La gente se siente entonces defraudada, y retira su confianza al presidente. Cuando, como ocurrió en 1993, el sistema ya no es capaz de renovar la promesa populista con un candidato adecuado, la crisis de gobierno se vuelve crisis del régimen.

El diagnóstico popular de la crisis venezolana es pues de tipo moral. El país es rico, y el presidente se comprometió conmigo a incrementar mi participación en esa riqueza. Ello no ocurre; debe de ser entonces que el presidente es un ladrón y un mentiroso, a quien no le duele el sufrimiento del pueblo. El problema se resuelve cambiando al presidente por un hombre, ahora sí, honesto y atento a los pobres. La cuestión política se

percibe como una cuestión personal de moralidad del presidente.

Sobre ese esquema político, profundamente asimilado por el pueblo venezolano, llegó a la presidencia Chávez, no en virtud de un programa o una ideología. Sobre él se construye su base electoral, la popularidad de su figura y la lealtad del «chavismo popular y democrático». No debe desconocerse, sin embargo, que con Chávez las mayorías populares eligieron un cambio de régimen, no en el sentido de que quisieran una nueva institucionalidad, sino en el sentido de que dejaron de esperar de la antigua clase política el cumplimiento de la promesa populista. No sólo desesperanza o desilusión, sino también positivo resentimiento de sentirse personalmente engañados a lo largo de dos décadas, ofrecieron a Chávez una base sólida en el sentir de la gente.

Chávez ha sido relativamente inmune al desgaste que el incumplimiento de la promesa populista produce en los líderes de este tipo. Junto con la decepción de fondo con el régimen anterior, otros factores explican esto. Uno es, sin duda, la gran capacidad de comunicación directa con el sentir popular que Chávez posee personalmente y utiliza en abundancia.

Capaz de hablar a los mecanismos más profundos de la psique colectiva, porque son los de la suya propia; cercano a la gente, porque comparte sus defectos y virtudes; dispuesto a entablar una relación personal incluso en las ocasiones más solemnes, puesto que percibe relaciones y no instituciones, Chávez ha mostrado dones innatos para renovar la esperanza populista, superiores posiblemente a los que Evita tuvo en su tiempo.

Otro factor determinante del éxito político de Chávez ha sido, sin duda, el súbito incremento del precio internacional del petróleo (de US\$ 8 a US\$ 46 por barril de la cesta venezolana) y, por tanto, de la renta disponible para distribuciones populistas. La manera en que Chávez ha realizado esa distribución, sin embargo, nos dice algo sobre la crisis venezolana que merece un apartado en sí mismo.

### El desplome institucional

Mientras el diagnóstico popular de la crisis venezolana sitúa la clave del problema en la moralidad del liderazgo político, entendida en los términos populistas que hemos descrito, hay un fenómeno de importancia muy supe-

rior que, sin embargo, recibe menos atención. Se trata del desplome de las instituciones públicas, que en Venezuela dura justamente desde finales de los años 70, cuando comenzó la crisis actual.

Un breve esquema teórico ayudará a comprender esto. En las complejas sociedades modernas, la eficiencia de la producción y la justicia de la distribución social depende de la calidad de las instituciones. Esa calidad incluye a su vez varios aspectos: su diseño y el de las políticas públicas, que es el tema de discusión de las diversas ideologías; su gestión, respecto a la cual se evalúa a los gerentes públicos; y, antes que todo ello, su grado de implantación social. Una institucionalidad está bien implantada cuando las normas que propone son incorporadas a la conducta cotidiana de los ciudadanos, que se relacionan según ellas en el ámbito público. Si, por el contrario, los ciudadanos actúan de ordinario en lo público según reglas distintas a las de las instituciones formales, se produce una esquizofrenia paralizante: unas normas en el papel y otras en la realidad social, con las consiguientes ineficiencias productivas, injusticias en las distribuciones, y dificultades de gobernabilidad.

Venezuela ha mostrado, desde la misma Independencia, una vo-

luntad fallida de convertirse en nación moderna. Se ha dado a sí misma instituciones semejantes a las de los países desarrollados, pero no ha conseguido implantarlas en el grado suficiente como para que produzcan los frutos completos de la modernidad occidental. Pueden darse diversas razones para ello, pero la más evidente deriva de los mismos factores presentados en el epígrafe anterior. La cultura pública venezo-

---

*el caudal electoral que llevó a Chávez a la presidencia estaba formado muy principalmente por millones de personas que habían participado en el sistema de partidos anterior, y se habían sentido defraudadas por él*

---

lana prioriza sistemáticamente las relaciones personales sobre las institucionales. Donde existe una relación personal o puede entablarse en el momento, la norma institucional es sistemáticamente pospuesta a esa relación, violada si es necesario para satisfacer o profundizar el vínculo personal. Como ello no ocurre excepcionalmente (como la corrupción administrativa en los países más desa-

rollados) sino de manera regular, y puesto que no es sentido por la gente como un mal sino como un bien moral (hacer un favor poniendo a la persona por encima de la norma), el resultado es un considerable malfuncionamiento de las instituciones. Sobre el desorden consiguiente resulta fácil desarrollar operaciones de apropiación privada de bienes públicos, porque no hay instituciones para impedirlo. Las distribuciones sociales ocurren primariamente a través de redes de conexiones personales, lo que las hace estructuralmente injustas.

Esto permite comprender el enraizamiento del populismo en la cultura pública venezolana, formando una suerte de círculo vicioso. La gente busca el vínculo personal con el líder porque las instituciones no funcionan pero, al hacerlo, impide precisamente que las instituciones funcionen, lo que le confirma en la idea de que lo esencial son las relaciones personales, no las instituciones. Normalmente ese círculo vicioso sería roto por los conflictos sociales a los que la ineficiencia y la injusticia del sistema darían lugar. Tales conflictos empujarían a la sociedad, quiéralo o no, a aprender a atenerse a las reglas institucionales. Pero en Venezuela los conflictos pueden evitarse o atenuarse

merced a la renta petrolera. Una subida de los precios del petróleo ofrece recursos adicionales sin producción adicional, que pueden ser utilizados para apaciguar a los descontentos de cada momento. Es posible incluso tener más producto con menos productividad social y tapar así temporalmente la caída de eficiencia del sistema, hasta que una bajada de los precios del petróleo la ponga nuevamente de manifiesto.

Las instituciones públicas venezolanas vienen cayendo en su eficiencia y justicia desde los años '70. Como no se trata meramente de un asunto de diseño o de gestión, sino de implantación social, reconstruirlas de raíz para volver a hacerlas funcionales y verosímiles es el mayor desafío histórico a que se enfrenta cualquier gobernante venezolano. Pero Chávez, que comparte la ceguera institucional característica de la más pobre cultura pública venezolana, no es capaz de hacerlo, probablemente ni siquiera de ver el problema en toda su hondura. En su práctica política, no ha mostrado siquiera respeto por sus propias normas, por las instituciones que él mismo ha definido, ni por las personas que ha colocado a su frente.

No extraña entonces que cuando Chávez quiso desarrollar la polí-

tica de distribución populista de renta petrolera para la que fue elegido, en vez de reformar al aparato ministerial para hacerlo al menos capaz de distribuir con eficiencia, recurrió primero a la Fuerza Armada. Una vez ésta demostró que no en vano era parte del Estado venezolano, la popularidad del presidente cayó hasta niveles que le hicieron temer la pérdida del poder. La gente no estaba recibiendo su parte en el pacto populista. Recurrió entonces a organizar un aparato distributivo paralelo al del Estado —las llamadas «misiones»—, gestionado por sus activistas políticos y con fuerte intervención cubana. Venezuela se encuentra así con su millón largo de funcionarios de las instituciones ordinarias del Estado, que apenas funcionan pero hay que seguir pagando, y con un aparato extrainstitucional, tipo «operación», también muy caro, que presta servicios directos en materias de salud, educación, alimentación e identificación a las bases populares del chavismo, al mismo tiempo que las encuadra políticamente. Con ello Chávez va resolviendo el problema de consolidar y organizar al «chavismo popular y democrático».

El método funciona tanto más cuanto que el desplome institu-

cional, que continúa, impide cualquier recuperación económica no basada en el precio del petróleo, y por tanto, establece límites rígidos a la inversión y la creación de empleo no movidas desde el Estado. A falta de otro lugar donde buscar empleo –los trabajadores– o donde conseguir oportunidades de negocio –los empresarios– todos deben echarse en brazos del gobierno, estableciendo con él las relaciones clientelares típicas del populismo.

El resultado del continuado deterioro institucional es patente: desde 1999 a 2004, la pobreza se extendió a dos millones de personas más, según cifras oficiales. Nunca antes había crecido la pobreza en Venezuela en tiempos de bonanza petrolera. Junto con ello, la corrupción –o, mejor dicho, los recursos estatales de los que el gobierno no es capaz de dar cuentas a la sociedad– está alcanzando proporciones gargantuescas, puesto que las instituciones encargadas de velar por los recursos públicos están, de hecho, cooptadas por aquellos a quienes debían controlar. La única manera de tener alguna eficiencia y justicia sociales es garantizándolas institucionalmente más allá de las buenas o malas intenciones de quienes ocupen el poder. Esto

vale para la izquierda tanto como para la derecha.

### **Cultura democrática, oposición social y oposición política**

Desde un principio, el discurso político chavista fue muy agresivo, no sólo contra las elites del régimen anterior sino pronto también contra los sectores sociales que consideraba beneficiarios de ese régimen –en particular las clases medias– y contra las entidades sociales que se empeñaran en mantener su autonomía –como los sindicatos, los medios de comunicación, las universidades o la Iglesia.

Los sucesivos intentos de doblegar a estos sectores usando el poder del Estado han venido levantando una considerable oposición social, que a menudo ha logrado detener o modificar medidas gubernamentales y legislativas. Pese a que el mecanismo político básico del país siga siendo el pacto clientelar populista, Venezuela ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas importantes elementos de modernidad política, desigualmente asumidos por distintos sectores sociales. El aprecio por las libertades y la constitución democrática del sistema político es uno de ellos. La nostalgia de una insti-

tucionalidad que de verdad funcione, el sentido consiguiente de ciudadanía, y el aprecio por la calidad de la gestión pública son otros.

Esta oposición social al chavismo debería, normalmente, haberse transformado en una oposición política eficaz. Sin embargo, no ha sido así. En la oposición política quedan demasiados de los actores y modos de hacer que determinaron la caída del régimen anterior, faltando sin embargo líderes de la talla de quienes fundaron ese régimen. Chávez sustituyó un populismo de partidos que había defraudado a las mayorías con un populismo caudillista aún más radical. Parte de la oposición política –típicamente la más popular– responde al antiguo populismo, mientras que otra parte –típicamente las clases medias– lo repudia y propone un salto adelante en la institucionalización del país. El primer sector de la oposición presenta líderes «quemados» por su implicación en el régimen anterior, mientras que el segundo sector todavía no cuenta con un liderazgo político maduro.

De momento, pues, la oposición social está muy débil de representación política y ha de representarse a sí misma. Es incierto cuánto tiempo pasará hasta que la oposición política sea capaz de pre-

sentar liderazgo, programa y capacidad de acción suficientes para desafiar seriamente a Chávez.

### **Socialismo, antiamericanismo y dictadura**

Chávez conserva pues la representación política legítima de la mayoría, aunque la ejerce de manera que difícilmente podría calificarse de democrática, si la democracia incluye la división de

---

*la figura dominante de la política venezolana es desde hace siglos el «caudillo» en quien personalmente se pone la confianza, no la institución estable o la ideología política*

---

poderes, el atenuamiento a las reglas institucionales y el respeto de las libertades y la autonomía de los actores sociales. El mayor riesgo contra su proyecto político no proviene de la oposición sino de la constitución misma de ese proyecto, tal como la hemos explicado.

En efecto, un populismo basado en la promesa de distribución de renta petrolera, incapaz de refor-

mar las instituciones para hacer esa distribución eficiente y justa, encuentra su límite en que crea expectativas crecientes que debe satisfacer por sí solo. Sin la seguridad jurídica y las oportunidades de negocio que un marco institucional en buen funcionamiento proporciona, no cuenta con la inversión privada para ayudarle en la creación de empleo y la generación de riqueza. Estas dependen únicamente de algo tan volátil como el precio internacional del

---

*Chávez necesita la dictadura  
que impida al previsible  
malestar generalizado  
volverse fuerza política que  
lo expulse del poder*

---

petróleo. Por otra parte, al haberse enajenado a las clases medias, carece de cuadros profesionales competentes para gestionar el Estado y hacerlo más eficiente. Si a ello se une que no hay contención institucional para la corrupción, se tiene un cuadro en que, más pronto que tarde, las expectativas populistas de la población volverán a sentirse defraudadas más allá de la capacidad personal del presidente para renovarlas.

Para ese momento, Chávez nece-

sita tener un control sobre la sociedad que impida al previsible malestar generalizado volverse fuerza política que lo expulse del poder. No puede confiar en la mera incapacidad de la oposición política, que, mejor o peor, se irá superando. Necesita la dictadura.

Es sabido que los regímenes más inestables son los semi-autoritarios, en los cuales el control del Estado está totalmente en manos del gobierno pero quedan abiertos espacios sociales de disidencia en los medios de comunicación, los partidos políticos y las asociaciones libres. Más estables que ellos son los regímenes autoritarios, capaces de controlar por entero a la sociedad, y todavía más estables los regímenes propiamente democráticos de constitución ampliamente consensuada, en que puede cambiar el gobierno sin que se resienta el sistema. Chávez, consciente de la precariedad de una legitimidad de reparto populista en un contexto de institucionalidad insuficiente para la creación de riqueza, ha elegido consolidar su régimen haciéndolo más autoritario, esto es, usando su control absoluto del Estado para controlar de la sociedad.

Para ello ha utilizado mecanismos diversos: leyes y disposiciones

que limitan la libertad de expresión, la autonomía de las universidades y los sindicatos, la libertad de acción de los partidos...; persecución judicial de dirigentes opositores; negación de derechos de ciudadanía a quienes se han manifestado contra él; control selectivo de divisas e inspecciones fiscales también selectivas para motivar la adhesión del empresario; organización de milicias partidistas...

La estrategia se ha hecho más explícita en los últimos meses. El discurso oficial incluye ahora la implantación del socialismo en Venezuela, junto con un fuerte alegato antiamericanista destinado a crear la sensación de una amenaza externa que justifique restricciones adicionales de las libertades. Mientras las encuestas muestran que el grueso de la población, incluidas las bases del «chavismo popular y democrático», rechazan la idea de un régimen como el cubano para Venezuela, cabe también que la gente entienda el socialismo en clave populista (el Estado va a quitarle a los ricos para darme a mí) y no se oponga frontalmente a él. Es pronto para saberlo. También es incierta la suerte del intento de crear un sentimiento antiamericano en un país tradicionalmente aliado de los Estados Unidos,

cuya cultura admira y que nunca ha sufrido abusos por parte del imperialismo americano, que tanto ha golpeado a otros países de la región.

Lo cierto es que bajo la retórica socialista y antiimperialista se esconde, más que una ideología que sólo una pequeña parte de la base política chavista comparte, una necesidad de autoritarismo para que el régimen sobreviva cuando el desencanto con la distribución populista se extienda y le reste legitimidad social.

Los obstáculos para el éxito de este intento son numerosos. Hemos mencionado la mayoría de ellos, pero los recontamos aquí a manera de síntesis. Por una parte, cabe esperar fuerte resistencia social y eventualmente política, fundada en la cultura democrática cultivada en las décadas anteriores, que no sólo abarca a los sectores sociales opositores sino también a la mayor parte de las bases chavistas. Por otra parte, la inoperatividad institucional plantea un serio *hándicap*. Para que el Estado controle a la sociedad, es preciso antes que el gobierno controle al Estado. La construcción de un aparato paralelo de servicios muestra que en realidad el sector público no le responde bien —ni a este gobierno ni a ningún otro, en las ac-

tuales condiciones de deterioro institucional-. Ese deterioro juega contra la dictadura, no a su favor, pero el chavismo parece incapaz de revertirlo o siquiera entenderlo. Además, todo el intento depende de las capacidades comunicacionales, por tanto de la salud física y mental, de una sola persona, que concentra en sí la representación política y no tiene reemplazo dentro de su propio movimiento. Finalmente, para que el intento funcione es preciso que los precios del petróleo le acompañen a lo largo de todo el camino de construcción de la dictadura y que la comunidad internacional acepte el fin de la democracia en Venezuela.

Mientras las intenciones del presidente son claras y no necesitan mucha interpretación, sus posibilidades de éxito distan de serlo. Seguramente la sociedad venezolana sea ya demasiado compleja y libre como para instaurar un «socialismo» autoritario. Más probable es que un régimen clientelar basado sobre la renta petrolera, sin capacidad de institucionalización ni de creación interna de riqueza, y sin un pacto político amplio que lo fundamente y legitime también con la oposición, resulte en mayor pobreza e inestabilidad. La crisis venezolana, que dura ya veinticinco años, está lejos de cerrarse. ■